

Comenzó el desembarco

Fuga de funcionarios: Vivienda y Desarrollo Social encabezan renuncias

Entre septiembre y diciembre de 2024, presentaron su renuncia 39 trabajadores a planta, contrata u honorarios. La mayoría tenía un perfil técnico.

Nicolle Peña

La última fue la abogada Macarena Díez, jefa jurídica del ministerio de Bienes Nacionales. Tras el escándalo por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, este miércoles la abogada renunció a su cargo. Sin embargo, ni ella ni la exministra de la cartera Marcela Sandoval -también caída por el intento de transacción- están aún contabilizadas en las dimisiones registradas en el sistema de Transparencia, cuyo último dato disponible refleja lo sucedido hasta diciembre del año pasado.

De acuerdo a esa fuente de información, los ministerios cerraron diciembre con al menos 39 renuncias, mientras que en igual mes de 2021 -último de la administración de Sebastián Piñera- 54 funcionarios salieron por voluntad propia. Si se considera el período septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cerca de 172 personas dejaron su cargo. Se trata principalmente de profesionales de perfil técnico que prestaban servicios a través de contrata u honorarios. En un contexto donde restan meses de la elección presidencial y con las encuestas mostrando la probabilidad de un cambio de color político, entre funcionarios ha comenzado a surgir una inquietud sobre su futuro laboral.

El perfil de quienes salieron

El ministerio con más renuncias entre septiembre y diciembre fue Vivienda (ver infografía). De las 28 renuncias que hubo ahí, solo una correspondió a una funcionaria de planta que estaba de suplente en un cargo vacante. Entre los demás hay analistas, supervisores, coordinadores y asesores.

En Desarrollo Social, la segunda cartera con más dimisiones (26), con cuatro trabajadores de planta. Una de ellas venía al menos desde el gobierno de Piñera y era especialista en grupos vulnerables de la seremi del Maule. Y en el mismo organismo, también decidió dejar su cargo el coordinador del área Niñez. En la Subsecretaría de Servicios sociales del ministerio también salió un profesional de apoyo de auditoría interna que estaba de planta y



en diciembre renunció el seremi de Coquimbo, Eduardo Alcayaga. Así las renuncias han sido tanto a nivel central como regional, aunque la mayoría se concentran en la RM. Ahí salieron un analista de estudios, un jefe de unidad de procesos estadísticos de programas sociales, un analista de adquisiciones, la coordinadora de proyectos Elige Vivir Sano y el super-

visor regional de la Niñez, entre otros. Eso sí, entre las renuncias hay casos puntuales que obedecen a cambios de repartición. Por ejemplo, Camilo Ballesteros dejó el gabinete de la subsecretaría de FF.AA. tras ser reclutado en noviembre por Carolina Leitaó, cuando asumió como subsecretaria de Prevención del Delito. Ahora es su jefe de asesores (\$ 4.817.944).

Lo mismo ocurrió con la exsubsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, que se fue nombrada directora administrativa de La Moneda (\$ 7.986.850) y su exjefe de gabinete, Sebastián Silva, quien ahora es subdirector administrativo de Palacio (\$ 6.860.355).

Bufetes de abogados y centros de estudios

"En este gobierno se crearon más de 100 mil nuevos cargos, la mayoría de contrata (...). Probablemente, si hay un cambio de color político en el Gobierno habrá una mayor radicalidad en los despidos, en términos de números, que en cambios de administración anteriores", anticipa Carlos Williamson, de Clapes UC.

Frente esa posibilidad, el exdirector del Servicio Civil cree que algunos funcionarios se pueden estar adelantando al comenzar a buscar opciones en el sector privado. A eso suma otra situación que podría complicar el futuro de los contrata que se queden: la polémica por la confianza legítima. Una de las primeras acciones de la contralora Dorothy Pérez al asumir fue dejar en manos de la Justicia los despidos que reclamen confianza legítima, desahaciendo parte del legado en materia laboral del excontralor, Jorge Bermúdez, quien estableció que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando. El criterio de la Corte Suprema, en cambio, ha sido de cinco años. "Si cambia la coalición política van a aparecer muchos de estos casos. Habrá muchísimas situaciones de despido que se judicializarán", enfatiza Williamson.

Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com, comenta que los profesionales que salen de un gobierno que pueden ser más atractivos para el sector privado son "en principio, los jefes de gabinete, por el conocimiento de las distintas carteras, pero también los funcionarios no políticos de áreas técnicas más tradicionales de la administración de negocios, tecnología y finanzas".

Los cargos más políticos, agrega, "por lo general son cotizados en bufetes de abogados o centros de estudios, es difícil que se desliguen del todo de su *know how* público y este tipo de empresa les permite esa continuidad y sacar provecho así a la experiencia ganada". Esto, aunque no tengan experiencia previa en el sector privado como ocurre en algunos casos de altos funcionarios de gobierno que han seguido una trayectoria más bien partidista o entraron al gobierno habiendo recién terminado posgrados.